

la inflación en el sector de servicios es un peligro constante, y la bajada de los tipos de interés ha inducido un ya notable crecimiento del consumo. En 1999 los tipos habrán bajado un punto más (por razones de preparación de la entrada en vigor del euro), y si a esto se suma la inyección de liquidez resultante de la bajada de los impuestos, el peligro de que la inflación se desate es bastante grande. Por otra parte, el gobierno quiere recuperar la inversión pública, casi paralizada este año, en los presupuestos de 1999, además de incrementar significativamente la inversión en educación y en I+D. Puede que el incremento del consumo se traduzca en una recaudación suficiente para cuadrar las cuentas, pero es evidente que el gobierno se va a mover en el filo de la navaja.

El propio riesgo de la operación favorece la idea de un adelanto de las elecciones, especialmente si el déficit y/o la inflación levantan sus feas cabezas en el paraíso de José María Aznar. Si las cuentas comienzan a torcerse en los primeros meses de 1999, es muy poco probable que el gobierno conservador decida dar muestras de responsabilidad y tomar medidas impopulares asumiendo el precio político en el 2000. Por el contrario, parece esperable que decida juntar todas las elecciones: si gana de nuevo podrá ajustar el cinturón a los españoles, confiando en que para el 2003 sus ma-

***Un gobierno que busca
garantizar la estabilidad
monetaria necesita ante
todo credibilidad.***

los pasos hayan quedado olvidados, y, si pierde, allá se las entienda el gobierno que le suceda. Contando, además, con que difícilmente se ganan elecciones anunciando subidas de impuestos, la hipoteca recaería doblemente sobre la oposición socialista.

Esta posibilidad de adelanto electoral encaja bien con otros hechos: la salida del asilvestrado portavoz Miguel Angel Rodríguez y su sustitución por un ministro de perfil centrista, o la firma de la paz con el grupo Prisa a través del acuerdo de Telefónica con Sogecable para unificar las respectivas plataformas de televisión digital, poniendo fin a una guerra que estuvo a punto de llevar a la cárcel al fundador de *El País*, Juan Luis Cebrián, y a buena parte de los directivos del grupo. Pero también encaja con una estrategia contradictoria: el intento de utilizar el fallo condenatorio contra el exministro socialista del Interior, José Barriónuevo, en el juicio contra los GAL, para emprender una nueva campaña contra Felipe González.

Esta campaña es obvio que busca liquidar a González como candidato a presidente de la Comisión Europea en 1999, a la vez que quemarle ante la temida posibilidad de que regrese a la vida política nacional. Si Aznar va a jugar todas sus cartas en la primavera de 1999, no puede cumplir otra de sus promesas, la de «pasar página» sobre la cuestión de los GAL, que divide profundamente a los españoles, una vez que los tribunales hubieran actuado.

El problema es que las dos estrategias casan mal entre sí: no se puede pretender ofrecer una imagen más civilizada y a la vez ir al acoso y de-